

Garantías del procedimiento para padres de alumnos con discapacidades



Oficina de educación especial y
de servicios de intervención temprana

28 de julio de 2005

Índice

	Página
Introducción	1
Aviso de las garantías del procedimiento	1
Consentimiento del padre o la madre.....	1
Limitación	2
Aviso previo a los padres	2
Participación del padre o la madre.....	3
Junta.....	3
Procedimientos de la evaluación	3
Evaluación educativa independiente	5
Mediación	6
Imparcialidad del mediador	6
Acuerdo por escrito	7
Audiencia debida imparcial	7
Asunto a tratar de la audiencia.....	8
Sesión de la resolución.....	8
Funcionario de audiencias.....	9
Decisión del funcionario de audiencias.....	9
Derechos de la debida audiencia.....	10
Apelación administrativa: Revisión imparcial	10
Acción civil	11
Estatus del alumno durante los procedimientos	11
Adjudicación de los honorarios del abogado	11
Disciplina.....	13
Ubicación en un ambiente educativo alternativo.....	13
Autoridad del personal de la escuela	13
Determinación de la discapacidad manifestada	13
Circunstancias especiales	14
Notificación	15
Determinación del lugar	15

Apelación	15
Autoridad del funcionario de audiencias	15
Ubicación durante las apelaciones.....	15
Protecciones para alumnos aún no elegibles para recibir educación especial y servicios relacionados	16
Base del conocimiento	16
Excepción	16
Condiciones que se aplican si no hay base del conocimiento	16
Limitaciones	16
Referencia a una acción por el cumplimiento de la ley y por las autoridades judiciales	17
Remisión de registros	17
Alumnos inscritos en escuelas privadas.....	17
Traspaso de los derechos de paternidad en la mayoría de edad	17
Padres sustitutos	18
Acceso a registros.....	18
Registro de acceso	19
Cargos por buscar, recuperar y copiar registros	19
Modificación de los registros a solicitud de los padres	19
Confidencialidad.....	20
Destrucción de información.....	20
Reclamaciones	21
Regla de interpretación.....	21
Anexo al IEP	22

GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO PARA PADRES DE ALUMNOS CON DISCAPACIDADES

Introducción

Este documento le proporciona a los padres de alumnos con discapacidades, desde su nacimiento hasta la edad de 26 años, un panorama general de sus derechos educativos con respecto a la educación especial. Este documento incorpora todas las garantías del procedimiento para los padres y para los alumnos con discapacidades otorgadas conforme a la Ley educativa para personas con discapacidades (IDEA) y los reglamentos implementados por la Ley IDEA.

Aviso de las garantías del procedimiento

Se les proporcionará a los padres un Aviso de las garantías del procedimiento, por lo menos una vez al año, a excepción de una copia la cual les será dada a los padres:

1. En la referencia inicial o a solicitud de los padres de una evaluación;
2. Cuando se archive por primera vez la debida audiencia;
3. A solicitud de los padres; o
4. El día en que se tome la decisión de llevar a cabo medidas disciplinarias referentes al cambio de ubicación.

Consentimiento del padre o la madre

“Consentimiento” significa que: (a) el padre o la madre ha recibido, en su lengua materna o por otro medio de comunicación, toda la información pertinente a la actividad para la cual se solicita el consentimiento; (b) el padre o la madre entiende y está de acuerdo, por escrito, en la ejecución de la actividad para la cual se solicita su consentimiento, describiendo el consentimiento de esa actividad y enumerando los registros (si los hubiere) que serán entregados y a quién le serán entregados; y (c) el padre o la madre entiende que el dar su consentimiento es voluntario y que puede ser revocado en cualquier momento. Sin embargo, si el padre o la madre revoca el consentimiento, la revocación no será retroactiva.

No se requiere el consentimiento de los padres antes de la revisión de la información existente como parte de una evaluación o reevaluación, o cuando se administra un examen u otra valoración que se administra a todos los alumnos a menos que se requiera del consentimiento de los padres de todos los alumnos, antes de administrar dicho examen o valoración. No se requiere el consentimiento de los padres para que un alumno sea investigado por un maestro o un especialista para determinar las estrategias de instrucción adecuadas para la implementación del plan de estudios; y no será considerada una valoración para la elegibilidad de educación especial y de servicios relacionados.

La agencia pública debe obtener el consentimiento del padre o la madre antes de llevar a cabo una valoración inicial, cualquier reevaluación o la ubicación inicial de un alumno en un programa que proporcione educación especial y los servicios relacionados. No se interpretará el consentimiento para una evaluación inicial como

un consentimiento para una ubicación inicial. Si el padre o la madre no da el consentimiento para una evaluación inicial, o si el padre o la madre no cumple en responder la solicitud de dar el consentimiento, la agencia educativa local puede reclamar la evaluación inicial de alumno a través de una debida audiencia. Si el padre o la madre no cumple en responder la solicitud para una reevaluación, la agencia pública puede llevar a cabo una reevaluación si se puede demostrar que se han tomado las medidas razonables para lograr el consentimiento del padre o la madre.

Para llevar a cabo una evaluación inicial, el distrito debe solicitar el consentimiento del padre o la madre y darle aviso, incluyendo lo siguiente:

1. La(s) razón(es) y naturaleza para una evaluación; y
2. Una descripción de los tipos de programas de educación especial y de los servicios disponibles dentro del distrito escolar intermedio (ISD).

Un distrito escolar local no deberá proporcionar programas y servicios de educación especial iniciales a un alumno si el padre o la madre niega su consentimiento a esos programas y servicios.

Limitación

Una agencia pública no puede usar la negación del consentimiento del padre o la madre para un servicio o una actividad para negar al padre o la madre o al alumno cualquier otro servicio, beneficio o actividad de la agencia pública, a excepción de cuando lo requiera la Ley IDEA.

Aviso previo a los padres

La agencia pública debe proporcionar un previo aviso por escrito a los padres de un niño con discapacidades cada vez que proponga o rechace iniciar o cambiar la identificación, la evaluación o la ubicación educativa del alumno, o la provisión de una educación pública gratuita y adecuada (FAPE) al alumno.

El aviso debe incluir:

1. Una descripción de la cual el padre o la madre pueda obtener una copia del documento de las Garantías del procedimiento;
2. Una descripción de la acción propuesta o rechazada por la agencia pública, una explicación de por qué la agencia pública propone o rechaza tal acción, una descripción de cualesquier opciones que la agencia pública considere y las razones por las cuales esas opciones fueron rechazadas;
3. Una descripción de cada procedimiento de evaluación, valoración, registro o informe que la agencia pública use como base para su propuesta o rechazo;
4. Una descripción de cualquier otro factor que sea pertinente para la propuesta o rechazo de la agencia pública; y
5. Una lista de las fuentes que el padre o la madre puede contactar para obtener ayuda para comprender el contenido del aviso previo.

El aviso debe estar redactado en un lenguaje que lo entienda el público en general y ser proporcionado en la lengua materna del padre o la madre o en algún otro medio de comunicación utilizado por el padre o la madre, a menos que sea claramente no factible el poder hacerlo. Si la lengua materna u otro medio de comunicación que utilice el padre o la madre no es una lengua escrita, la agencia pública deberá hacer que el aviso se le traduzca oralmente o por otros medios al padre o la madre en su lengua materna u otro medio de comunicación para que el padre o la madre entienda el contenido del aviso. La agencia pública debe conservar evidencia escrita de que estos requisitos han sido cumplidos.

Participación del padre o la madre

Toda agencia pública deberá proporcionar aviso para asegurar que los padres de menores con discapacidades tengan la oportunidad de participar en las juntas con respecto a la identificación, evaluación y la ubicación educativa de su hijo y la provisión de una FAPE.

Junta

Una agencia pública deberá tomar medidas para asegurar que uno o ambos de los padres de un hijo con discapacidad estén presentes en cada una de las juntas de los programas educativos individualizados (IEP), o que se les dé la oportunidad de participar. Una junta no incluye conversaciones informales o no programadas relacionadas con el personal de la agencia pública ni conversaciones sobre temas tales como metodología de la enseñanza, planeación de clases o la coordinación de la provisión de servicios si esos temas no están dirigidos al IEP del alumno. Una junta tampoco incluye las actividades de preparación que el personal de la agencia pública lleva a cabo para elaborar una propuesta o una respuesta al rechazo del padre o la madre, sobre lo cual se discutirá en una junta posterior.

Toda agencia pública se asegurará de que los padres de cada alumno con discapacidad sean incluidos como miembros de algún grupo que tome decisiones sobre la ubicación educativa de su hijo. Si ninguno de los padres puede participar en una junta en la cual se tome una decisión con respecto a la ubicación educativa de su hijo, la agencia pública deberá usar otros métodos para asegurarse de su participación. No se puede hacer una ubicación inicial sin el consentimiento del padre o la madre. Sin embargo, un grupo puede tomar otras decisiones referentes a la ubicación sin el consentimiento del padre, la madre o ambos, si la agencia pública no puede obtener la participación de los padres en la decisión. La agencia pública debe tener un registro de su intento en asegurar la participación del padre, la madre o ambos.

La agencia pública deberá hacer los esfuerzos razonables para asegurarse de que el padre o la madre entienda y que puede participar en cualquier discusión de grupo relacionada con la ubicación educativa de su hijo, incluso el conseguir un intérprete para el padre o la madre que padezca de sordera o cuya lengua materna no sea el inglés.

Procedimientos de la evaluación

“Evaluación” significa los procedimientos utilizados conforme a las secciones 34 CFR §§300.530 a 300.536 del reglamento federal. Una evaluación determinará si un alumno es un alumno con discapacidad, la naturaleza y la medida de la educación

especial y los servicios relacionados que el alumno necesita, y proporcionar información con respecto a la participación y el progreso del alumno en el plan de estudios general. Los niños preescolares también deben ser valorados para determinar la participación en actividades adecuadas. El término también significa los procedimientos utilizados de manera selecta con un alumno y no incluye los exámenes básicos aplicados a o los procedimientos utilizados con todos los alumnos en una escuela, grado o grupo.

El padre o la madre tiene el derecho a:

1. Tener un intérprete / traductor si su primera lengua no es el inglés o si el alumno es sordo / con discapacidad auditiva, a menos que sea claramente no factible el poder hacerlo.
2. Asegurarse de que los exámenes no discriminen en base a la raza, el idioma o los antecedentes culturales.
3. Asegurarse de que las valoraciones y otros materiales de evaluación utilizados para valorar a un alumno sean proporcionados y aplicados en el idioma y forma que más posiblemente rindan información precisa sobre lo que el alumno sabe y puede hacer en lo académico, del desarrollo y de la funcionalidad; a menos que no sea factible proporcionarlo o aplicarlo;
4. Tener los instrumentos de evaluación certificados para el(los) fin(es) específico(s) para los cuales fueron intencionados y aplicados por personal capacitado conforme a las indicaciones dadas por su productor;
5. Hacer que se valore al alumno en todas las áreas en las cuales se sospecha haya discapacidad utilizando instrumentos que valoren las áreas específicas de necesidad educativa y que no produzcan una simple puntuación de cociente intelectual. No se debe utilizar una sola medida o valoración como criterio único en la determinación de un programa de educación especial para el alumno.
6. Asegurarse de que si un examen se ha de aplicar a un alumno con discapacidad auditiva, física o del habla, los resultados reflejen con exactitud lo que el examen pretende medir más que demostrar la discapacidad del alumno;
7. Hacer que la evaluación inicial la haga un equipo de evaluación multidisciplinaria (MET), en el cual se incluye a un maestro o persona con conocimientos en el área en que se sospecha haya discapacidad;
8. Asegurarse de que el alumno sea valorado en todas las áreas relacionadas a las discapacidad sospechada; incluyendo, si se considera adecuado, la salud general, la vista, el oído, su estatus social y emocional, los factores conductuales, la inteligencia en general, el desempeño académico, el estatus comunicativo y la habilidad motriz;
9. Tener una evaluación que sea lo suficientemente extensa para identificar todas las necesidades de educación especial y de servicios relacionados, ya sea que estén o no comúnmente relacionados a la categoría de la discapacidad en la cual el alumno ha sido clasificado;

10. Proporcionar al MET con información sobre la discapacidad sospechada del alumno, junto con cualquier evaluación que el padre o la madre haya obtenido para el alumno;
11. Asegurarse de que una variedad de herramientas y estrategias de valoración sean utilizadas para recabar información pertinente, funcional, de desarrollo y académica sobre el alumno, incluyendo la información proporcionada por el padre o la madre y la información relacionada para permitir que el alumno participe en y progrese en el plan de estudios general;
12. Tener una evaluación inicial llevada a cabo por un MET y a convocar a una junta IEP dentro de 30 días a partir de que la escuela haya recibido el permiso por escrito para evaluar. Este periodo puede ampliarse por mutuo acuerdo entre los padres y la agencia;
13. Esperar a una reevaluación cada tres años, a menos que el padre o la madre y el distrito escolar local estén de acuerdo en que la reevaluación es innecesaria;
14. Solicitar una reevaluación no más frecuente que una vez al año, a menos que el padre o la madre y la agencia educativa local estén de acuerdo en lo contrario;
15. Ser notificados de cada procedimiento de evaluación, examen, registro o informe que utilice el equipo IEP para determinar la elegibilidad y la necesidad de programas y servicios de educación especial; y
16. Asegurarse de que un distrito local coordine, según se requieran y tan rápidamente como sea posible, las valoraciones previas de alumnos con discapacidades, quienes son transferidos de un distrito a otro en el mismo año académico, con el fin de asegurar un pronto llenado de las evaluaciones completas.

Evaluación Educativa Independiente

Una "evaluación educativa independiente" (IEE) significa una evaluación llevada a cabo por examinador calificado que no está empleado por la agencia pública responsable de la educación del alumno en cuestión. Un "IEE a costa del erario público" significa que la agencia pública cubre el costo total de la evaluación o se asegura de que la evaluación sea proporcionada sin costo alguno al padre o la madre.

El padre o la madre de un alumno con discapacidad o con discapacidad sospechada tiene el derecho a obtener una IEE del hijo. El padre o la madre tiene el derecho de una IEE a costa del erario público si el padre o la madre está en desacuerdo con cualquier evaluación obtenida por la agencia pública. Sin embargo, la agencia pública puede iniciar una debida audiencia para demostrar que su evaluación es adecuada. La agencia pública deberá responder, por escrito, a la solicitud del padre de una IEE siete días civiles a partir de la solicitud escrita del padre o la madre. Si la decisión final señala que la evaluación es adecuada, el padre o la madre todavía tiene el derecho a una IEE, pero no a costa del erario público. Si el padre o la madre obtiene una IEE a su propia costa, la agencia pública debe considerar los resultados en cualquier decisión que se tome con respecto a la provisión de una FAPE para el alumno, y puede ser presentada como evidencia en una debida audiencia que se trate del alumno.

Si un funcionario de audiencias solicita ser parte de la audición, el costo de la evaluación debe ser a costa del erario público. Toda agencia pública deberá proporcionar al padre o la madre, a su solicitud, información sobre cómo se puede obtener una IEE. Cuando una IEE es a costa del erario público, los criterios bajo los cuales se obtuvo la evaluación, incluyendo el lugar de la evaluación y la capacidad del examinador, serán los mismos que los criterios que usa la agencia pública cuando inicie una evaluación a tal grado que esos criterios sean coherentes con el derecho del padre o la madre a una IEE.

Mediación

La mediación está disponible para todas las partes siempre que surja una disputa con respecto a la educación especial, incluyendo pero no limitándose a cuando se solicita una audiencia o cuando se hace una queja. Los requisitos para una mediación de la Ley IDEA son:

1. La mediación es gratuita y voluntaria, incluyendo los costos de la junta para recomendar la mediación;
2. No se puede usar la mediación para negarle el derecho al padre o la madre de una debida audiencia;
3. La mediación debe ser llevada a cabo por un mediador calificado e imparcial.
4. El estado debe conservar una lista de las personas que estén calificadas como mediadores y que sean expertos en las leyes y reglamentos sobre la educación especial;
5. La mediación deberá ser programada de manera oportuna en un lugar conveniente;
6. Ambas partes deben estar de acuerdo en la selección del mediador;
7. Las partes que resuelvan una reclamación a través de la mediación deberán llevar a cabo un acuerdo obligatorio legalmente;
8. Las discusiones que sucedan durante la mediación deben ser confidenciales y no pueden ser usadas como evidencia en procesos o procedimientos civiles posteriores; y
9. Se les puede pedir a las partes involucradas en la mediación que firmen un compromiso antes de que inicie la mediación.

Imparcialidad del mediador

La persona que trabaja como mediador:

1. No puede ser empleado de ninguna agencia educativa local o estatal;
2. No puede ser empleado de una agencia educativa estatal que proporciona de manera directa los servicios a un alumno que es el sujeto del proceso de mediación; y

3. No debe tener un conflicto de interés personal o profesional.

Acuerdo por escrito

Un acuerdo obligatorio legalmente que se haya llevado a cabo como resultado de las partes que resuelven la reclamación a través de la mediación deberá:

1. Declarar que todas las discusiones que hubo durante el proceso de mediación serán confidenciales y no pueden ser usadas como evidencia en posteriores audiciones o en procedimientos civiles;
2. Estar firmado por el padre o la madre y por el representante de la agencia, quien tiene autoridad para tal acuerdo con la agencia; y
3. Ser exigibles por ley en cualquier tribunal de jurisdicción competente o en un tribunal de distrito de los Estados Unidos.

Audiencia debida imparcial

El padre o la madre o una agencia pública puede iniciar una audiencia con respecto a la propuesta o rechazo de iniciar o de cambiar la identificación, la evaluación o la ubicación educativa del alumno, o la provisión de una FAPE para el alumno. No deberá haber ocurrido la supuesta violación dos años antes de que el padre o la madre o la agencia pública se hayan enterado o debieron haber sabido sobre la presunta acción que forma la base de la debida audiencia.

El periodo de dos años no se aplicará al padre o la madre si al padre o la madre se le impidió solicitar la audiencia debido a:

1. Ciertas declaraciones falsas de parte de la agencia educativa local diciendo que había resuelto el problema dando con esto la base para la debida audiencia; y
2. La retención de información de parte de la agencia educativa local del padre o la madre la cual era obligatorio darle al padre o la madre.

Cuando una debida audiencia inicie, la agencia pública deberá informar al padre o la madre de la disponibilidad de la mediación.

El padre o la madre debe dar aviso a la agencia pública, como corresponde, cuando presente una solicitud para una debida audiencia. La solicitud de aviso debe contener la siguiente información:

1. El nombre del alumno, su domicilio (o dónde contactarlo en caso de que sea un menor sin hogar), y el nombre de la escuela a la que asiste.
2. Una descripción de la naturaleza del problema, incluyendo los hechos relacionados; y

3. Una resolución propuesta del problema en la medida que se conoce y a disposición del padre o la madre en ese tiempo.

El padre o la madre no puede obtener una debida audiencia hasta que el padre de familia, o el abogado que lo representa, dé aviso del debido proceso el cual incluye la información antes mencionada a la otra parte y mandar copia de tal aviso a la agencia educativa estatal.

Este aviso debe mantenerse confidencial.

En el ISD hay un modelo de formulario para apoyar al padre o la madre al presentar solicitudes para una debida audiencia.

La agencia pública, responsable de la educación del alumno, llevará a cabo una audiencia.

La agencia pública deberá informar al padre o la madre de cualquier servicio legal pertinente disponible gratuito o de bajo costo en el área si el padre o la madre solicita la información o el padre o la madre o la agencia pública inicia una debida audiencia.

Asunto a tratar de la audiencia

La parte que solicita la debida audiencia no deberá tratar temas en la debida audiencia que no fueron tratados en el aviso del proceso, a menos que la otra parte esté de acuerdo.

Sesión de la resolución

Antes de que se presente la oportunidad de una debida audiencia, la agencia educativa local deberá concertar una junta con los padres y con el(los miembro(s) pertinente(s) del Equipo IEP quien(es) tiene(n) el conocimiento específico de los hechos identificados en la reclamación. La junta deberá:

1. Llevarse a cabo dentro de 15 días civiles a partir de recibir el aviso de la reclamación del padre o la madre;
2. Incluir a un representante de la agencia que tenga la autoridad de parte de la agencia para tomar decisiones;
3. No incluir a un abogado de la agencia educativa local, a menos que los padres sean acompañados por abogado;
4. Ser un lugar en donde los padres del menor discutan su reclamación, y los hechos que forman la base de la reclamación, y a la agencia de educación local se le dé la oportunidad de resolver la reclamación, a menos que los padres y la agencia educativa local estén de acuerdo en prescindir, por escrito, de tal junta o estén de acuerdo en usar el procedimiento de mediación.

Si la agencia educativa local no ha resuelto la reclamación a satisfacción de los padres dentro de los 30 días de haber recibido la reclamación, la debida audiencia puede llevarse a cabo y todos los periodos aplicables para una debida audiencia comenzarán.

En el caso de que se llegue a una resolución de la reclamación en una sesión, las partes deberán llegar a un acuerdo obligatorio legalmente que sea:

1. Firmado por el padre o la madre y por el representante de la agencia, quien tiene autoridad para tal acuerdo con la agencia; y
2. Ser exigible por ley en cualquier tribunal de jurisdicción competente o en un tribunal de distrito de los Estados Unidos.

Si las partes llegan a un acuerdo como resultado de la sesión de resolución, una parte puede invalidar tal acuerdo dentro de tres días hábiles de haber logrado el acuerdo.

Funcionario de audiencias

Una debida audiencia no puede ser llevada a cabo por una persona que sea empleada de una agencia pública, la cual esté involucrada en la educación o atención médica del alumno, ni por ninguna otra persona que tenga interés personal o profesional, lo que crearía un conflicto con su objetividad en la debida audiencia. Una persona que califica para llevar a cabo una debida audiencia no se considera empleada de la agencia pública por el simple hecho de que la agencia pública le pague para fungir como funcionario de audiencias.

La persona que califique para llevar a cabo una debida audiencia, como mínimo, tiene:

1. El conocimiento y la habilidad para entender las provisiones de la Ley IDEA, de los reglamentos federales y estatales pertenecientes a la Ley IDEA, a las interpretaciones de la Ley IDEA por los tribunales federales y estatales;
2. El conocimiento y la habilidad para llevar a cabo audiencias conforme a la práctica legal estándar y adecuada; y
3. El conocimiento y la habilidad para redactar las decisiones conforme a la práctica legal estándar y adecuada.

Toda agencia pública deberá conservar una lista de las personas que fungen como funcionarios de audiencias; el Departamento de Educación de Michigan (MDE) elabora y distribuye dicha lista. Se le proporcionará esta lista al padre o la madre ante cualquier solicitud suya. La lista debe incluir una declaración de las capacidades de cada una de esas personas.

Decisión del funcionario de audiencias

La agencia pública se asegurará de que se tome una decisión final en la audiencia y que sea enviada por correo a las partes dentro de 45 días civiles después de recibir la solicitud de la audiencia, a menos que el funcionario de audiencias otorgue una extensión a solicitud e alguna parte.

La decisión tomada en la debida audiencia es final, a menos que una parte de la audiencia apele la decisión bajo los procedimientos para la apelación administrativa imparcial que se describen a continuación.

La decisión tomada por el funcionario de audiencias será tomada basándose en una determinación de si el alumno recibió una FAPE.

En asuntos que suponen hubo una violación en el procedimiento, un funcionario de audiencias puede llegar a encontrar que un alumno no recibió una FAPE solamente si los procedimientos inadecuados:

1. Impidieron el derecho del alumno a una FAPE.
2. Impidieron considerablemente la oportunidad de que el padre o la madre participara en el proceso de la toma de decisiones con respecto a la provisión de una FAPE a su hijo; o
3. Causaron una pérdida de beneficios educativos.

Derechos de la debida audiencia

Toda parte de una audiencia tiene el derecho a:

1. Ser acompañado y aconsejado por un asesor y por gente con el conocimiento especial o la capacitación con respecto a los problemas del alumno con discapacidades;
2. Presentar evidencia y confrontar, interrogar y compeler la asistencia de los testigos;
3. Prohibir la presentación de cualquier evidencia (incluyendo evaluaciones y recomendaciones basadas en esas evaluaciones) que no haya sido mostrada a esa parte por lo menos cinco días antes de la audiencia; y
4. Obtener los resultados y la decisión por escrito o, a opción del padre o la madre, por medio electrónico sin costo alguno para el padre o la madre. Después de eliminar cualquier información personal identificable, la agencia pública enviará esa información y las decisiones a la junta de asesores del estado y las pondrá disponibles al público.

El padre o la madre que participe en las audiencias debe dársele el derecho de tener al alumno quien es el sujeto de la actual audiencia y de abrir la audiencia al público.

Toda audiencia debe llevarse a cabo en lugar y tiempo que se consideren razonables para el padre o la madre y el alumno involucrados.

Apelación administrativa: Revisión imparcial

Cualquier parte agraviada por las conclusiones y decisiones en la audiencia puede apelar al MDE (Departamento de Educación de Michigan) dentro de los 25 días civiles siguientes a la recepción de la decisión. Si hay una apelación, el MDE debe llevar a cabo una revisión imparcial de la audiencia antes de 30 días civiles después de recibir la solicitud de revisión. El funcionario que dirija la revisión debe:

1. Analizar el registro completo de la audiencia;

2. Asegurar que los procedimientos en la audiencia hayan sido coherentes con los requisitos del proceso debido;
3. Buscar evidencia adicional, si es necesario. Si la audiencia se suspende para recibir evidencia adicional, se aplican los derechos de audiencia descritos con anterioridad;
4. Otorgar a las partes la oportunidad de un argumento oral o escrito, o ambos, a discreción del funcionario que hace la revisión;
5. Tomar una decisión independiente al terminar la revisión;
6. Dar una copia escrita o, a elección del padre o la madre, electrónica de los hallazgos de los hechos, y la decisión de las partes;
7. Llevar a cabo revisiones incluyendo argumentos orales a la hora y en el lugar que sea conveniente para el padre o la madre y el alumno involucrados; y
8. Un funcionario de audiencia puede otorgar prórrogas específicas de tiempo a solicitud de cualquier parte.

Acción civil

Cualquier parte agraviada por los hallazgos y la decisión tomada en una revisión administrativa tiene el derecho de realizar una acción civil en el tribunal estatal o federal. La parte que realiza la acción tendrá 90 días para realizarla a partir de la fecha de la decisión del funcionario de la audiencia.

Estatus del alumno durante los procedimientos

Durante el tiempo que esté pendiente cualquier audiencia o procedimiento judicial, el alumno involucrado debe permanecer en su lugar educativo actual, a menos que la agencia pública y el padre o la madre lo decidan de otra manera. Cualquier IEP después del IEP inicial tendrá efecto, a menos que el padre o la madre esté en desacuerdo o solicite una debida audiencia.

Si la decisión del funcionario en una debida audiencia o en una apelación coincide con la del padre o la madre de que es adecuado cambiar el lugar, esto debe tratarse como un acuerdo entre la agencia pública y el padre.

Si la audiencia incluye una solicitud para la admisión inicial a una escuela pública, el alumno, con el consentimiento de sus padres, se deberá ubicar en el programa de escuela pública hasta que finalicen todos los procedimientos.

Adjudicación de los honorarios del abogado

Un tribunal puede adjudicar los honorarios del abogado a los padres del alumno con una discapacidad que prevalece en un proceso judicial o en una debida audiencia. Los honorarios deben ser coherentes con aquéllos que se aplican a servicios legales en la comunidad.

Una corte, a su discreción, puede adjudicar los honorarios razonables del abogado como parte de los costos:

1. A una parte predominante como lo son los padres de un menor con una discapacidad;
2. A una parte predominante quien es la agencia educativa estatal o federal contra el abogado del padre o la madre quien presenta una reclamación o una causa subsiguiente de una acción que es frívola, no razonable o sin fundamento, o contra el abogado del padre o la madre quien continúe litigando después de que el litigio se vuelve, de manera clara, frívolo, no razonable o sin fundamento; o
3. A una agencia educativa estatal o local contra el abogado del padre o la madre, o contra el padre o la madre, si la queja o la causa subsiguiente de la acción se presentó para cualquier propósito indebido, tal como para acosar, para causar un retraso innecesario o para incrementar sin necesidad el costo del litigio.

El reembolso de los honorarios del abogado y los costos relacionados se prohíben si:

1. El distrito realiza una oferta escrita de un acuerdo final más de 10 días antes de que el procedimiento comience;
2. La oferta no se acepta dentro de 10 días; y
3. La atenuante otorgada al padre o la madre en la audiencia o por parte del tribunal no es más favorable que la oferta del acuerdo final.

Si el tribunal determina una justificación razonable para que el padre o la madre rechace la oferta de un acuerdo final, y prevalece el padre o la madre en la audiencia o en el caso judicial, entonces se le podrán adjudicar los honorarios del abogado.

Para propósitos de honorarios del abogado, una sesión de resolución no se debe considerar una junta convenida como resultado de una audiencia administrativa o acción judicial.

El tribunal puede reducir los honorarios del abogado si determina que:

1. El padre, la madre o el abogado de estos ha retrasado sin razón la resolución final de la disputa;
2. Los honorarios del abogado exceden la tarifa por hora que prevalece en la comunidad para servicios similares;
3. El tiempo dedicado y los servicios legales prestados fueron excesivos considerando la naturaleza del caso; o
4. El abogado que representa al padre o la madre no le proporciona a la agencia pública la información adecuada en el aviso de una debida audiencia.

La reducción en los honorarios del abogado que se mencionó anteriormente, no aplica si el tribunal determina que la agencia pública o estatal:

1. Retrasa sin razón la resolución final de la disputa; o

2. Por otra parte, viola las garantías del procedimiento del padre o la madre.

Los honorarios del abogado no se deben adjudicar al padre o la madre por alguna junta del IEP, a menos que:

1. El tribunal o un procedimiento administrativo dirijan la junta; o
2. A discreción del estado, la junta es para que la mediación se realice antes de presentar una solicitud para una debida audiencia.

Disciplina

Ubicación en un ambiente educativo alternativo

El personal de la escuela debe considerar cualquier circunstancia única, caso por caso, cuando se defina si ordenar un cambio en la ubicación para un alumno con una discapacidad que viola el código de conducta.

Autoridad del personal de la escuela

El personal de la escuela puede trasladar de su ubicación actual a un alumno con una discapacidad que viole el código de conducta a un ambiente interino alternativo, a otro ambiente, o suspenderlo por no más de 10 días de clases (en la medida en que tales alternativas se apliquen a alumnos sin discapacidades).

Si el personal de la escuela busca ordenar un cambio en la ubicación que exceda 10 días de clases, y se determina que el comportamiento que dio origen a la violación del código escolar no es una manifestación de la discapacidad del alumno, se deben aplicar al alumno los procedimientos de disciplina pertinentes, de la misma manera y el mismo tiempo que se aplican a alumnos sin discapacidades, excepto como se muestra en la Sección 612(a)(1) de la Ley IDEA, aunque se pueda proporcionar en un ambiente educativo alternativo.

La Sección 612(a)(1) de la Ley IDEA establece que está disponible una FAPE para todos los alumnos con discapacidades que residan en el estado, incluyendo alumnos con discapacidades quienes han estado suspendidos o expulsados de la escuela.

Un alumno con una discapacidad que es trasladado de su ubicación actual bajo "circunstancias especiales" (independientemente de si se determina que el comportamiento es una manifestación de su discapacidad) o por una "autoridad del personal de la escuela" debe continuar recibiendo servicios educativos, así como participar en el plan de estudios general, aunque sea en otro lugar, y progresar hacia el cumplimiento de las metas que se establecen en el IEP; y recibir, de manera adecuada, una valoración funcional del comportamiento, servicios de intervención en el comportamiento y modificaciones que estén diseñados para abordar la violación del comportamiento y así no reincidir.

Determinación de la discapacidad manifestada

Excepto como se menciona bajo "autoridad del personal de la escuela", dentro de los siguientes 10 días de clases después de la decisión de cambiar la ubicación de un alumno con una discapacidad debido a una violación al código de conducta, la agencia educativa local, los padres, y los miembros pertinentes del Equipo IEP (como lo determinan los padres y la agencia educativa local) deben revisar toda la información pertinente en el archivo del alumno, incluyendo el IEP del mismo, cualquier observación del maestro, y cualquier información pertinente proporcionada por los padres para determinar:

1. Si la conducta en cuestión fue causa de, o tuvo relación directa y substancial con, la discapacidad del alumno; o
2. Si la conducta en cuestión fue el resultado directo de la falla de la agencia educativa local para implementar el IEP.

Si la agencia educativa local, los padres, y los miembros pertinentes del Equipo IEP determinan que, ya sea que la conducta en cuestión haya sido causada por, o haya tenido una relación directa y sustancial con la discapacidad del alumno, o que haya sido resultado de la falla de la agencia educativa local para implementar el IEP, entonces la conducta se debe determinar como una manifestación de la discapacidad del alumno.

Si la agencia educativa local, los padres, y los miembros pertinentes del Equipo IEP deciden que la conducta fue una manifestación de la discapacidad del alumno, el Equipo IEP debe:

1. Llevar a cabo una valoración funcional de comportamiento e implementar un plan de intervención del comportamiento para tal alumno, siempre y cuando la agencia educativa local no haya dirigido tal valoración previa a tal determinación que dio como resultado un cambio de ubicación;
2. Revisar el plan de intervención del comportamiento si el alumno cuenta ya con dicho plan, y modificarlo si es necesario, para abordar el comportamiento; y
3. Excepto como se menciona bajo "circunstancias especiales", regresar al alumno a la ubicación de la cual fue trasladado, a menos que los padres y la agencia educativa local coincidan en un cambio de ubicación como parte de la modificación del plan de intervención del comportamiento.

Circunstancias especiales

El personal de la escuela puede trasladar a un alumno a un ambiente educativo temporal alternativo por no más de 45 días de clases sin tomar en cuenta que se haya determinado que el comportamiento es una manifestación de la discapacidad del alumno en casos donde el mismo:

1. Lleva un arma a o la posee en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en eventos escolares bajo la jurisdicción de una agencia educativa estatal o local;
2. Con conocimiento posee o hace uso de drogas ilegales, o vende o promueve la venta de sustancias controladas en la escuela, o en las instalaciones de la escuela o en eventos escolares bajo la jurisdicción de una agencia educativa estatal o local; o
3. Provoca una herida corporal grave a otra persona en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en eventos escolares bajo la jurisdicción de una agencia educativa estatal o local.

Notificación

No después de la fecha en la cual se tomó la decisión de realizar una acción disciplinaria, la agencia educativa local debe notificar a los padres la decisión y todas las garantías del procedimiento acordadas en esta sección.

Determinación del lugar

El lugar educativo alternativo interino lo debe determinar el Equipo IEP.

Apelación

El padre de un menor con una discapacidad que esté en desacuerdo con la decisión en cuanto a la ubicación o a la determinación de la discapacidad manifestada bajo esta subsección, o la agencia educativa local que crea que mantener la ubicación actual del alumno sea una causa probable de herirse a sí mismo o a otros, puede solicitar una audiencia.

Autoridad del funcionario de audiencias

Un funcionario de audiencias escuchará y tomará una decisión en cuanto a la apelación. Al tomar la decisión, el funcionario puede ordenar un cambio en la ubicación de un alumno con una discapacidad. En tales situaciones, el funcionario puede:

1. Regresar al alumno con discapacidad a la ubicación de la cual provenía; o bien
2. Ordenar un cambio del alumno con discapacidad a un lugar educativo alternativo apropiado, de manera temporal, por no más de 45 días civiles si el funcionario determina que mantenerlo en la ubicación actual es una causa probable de herirse a sí mismo o a otros.

Ubicación durante las apelaciones

Cuando se ha solicitado una apelación ya sea por el padre, la madre o la agencia educativa local:

1. El alumno debe permanecer en el lugar educativo alternativo temporal para esperar la decisión del funcionario, o hasta que termine el periodo que se aplica a los alumnos sin discapacidades, lo que ocurra primero, a menos que los padres y la agencia educativa local acuerden otra cosa; y
2. La agencia educativa estatal o local debe hacer los arreglos para una audiencia agilizada, la cual debe realizarse dentro de los siguientes 20 días de clases a partir de que se solicite la audiencia, y habrá una determinación dentro de los siguientes 10 días escolares después de la audiencia.

Protecciones para alumnos aún no elegibles para recibir educación especial y servicios relacionados

Un alumno que aún no se ha determinado elegible para educación especial y servicios relacionados, y quien tiene un comportamiento que viola el código de conducta del alumno, puede hacer valer cualquiera de las protecciones proporcionadas en la Ley IDEA, si la agencia educativa local tenía el “conocimiento” (ver a continuación) de que el alumno era un alumno con una discapacidad antes de que se presentara un comportamiento que precipitara una acción disciplinaria.

Base del conocimiento

Una agencia educativa local debe tener el conocimiento de que un alumno es un alumno con una discapacidad si, antes de que se presente un comportamiento que precipita una acción disciplinaria ocurre esto:

1. El padre o la madre ha expresado su preocupación por escrito, al supervisor o al personal administrativo de la agencia educativa adecuada, o a un maestro del alumno, sobre la necesidad de educación especial y servicios relacionados;
2. El padre o la madre ha solicitado una evaluación del alumno; o
3. El maestro del alumno u otro miembro del personal de la agencia educativa local ha expresado al director de educación especial de tal agencia, o a otro miembro del personal de supervisión, sus preocupaciones específicas acerca del patrón de comportamiento que ha demostrado el alumno.

Excepción

Una agencia educativa local no considerará tener el conocimiento de que el alumno es un alumno con una discapacidad, si el padre no ha permitido que se realice una evaluación o se ha rechazado los servicios vistos aquí, o el alumno ha sido evaluado y se ha determinado que no es un alumno con una discapacidad.

Condiciones que se aplican si no hay base del conocimiento

Si una agencia educativa local no tiene el conocimiento de que un alumno es una persona con una discapacidad antes de tomar medidas disciplinarias contra él, el alumno puede ser sometido a medidas disciplinarias que se aplicaron a alumnos sin discapacidades quienes tuvieron comportamientos semejantes.

Limitaciones

Si se solicita una evaluación para el alumno durante el período en que está sometido a medidas disciplinarias, la evaluación se debe realizar de manera simplificada. Si se determina que el alumno tiene una discapacidad, tomando en cuenta la información de la evaluación dirigida por la agencia y la información proporcionada por los padres, la agencia debe proporcionar educación especial y servicios relacionados excepto que, pendientes los resultados de la evaluación, el alumno permanezca en la ubicación educativa que determinaron las actividades escolares.

Referencia a una acción por el cumplimiento de la ley y por las autoridades judiciales

Nada de la Ley IDEA se interpretará para prohibir a una agencia que reporte un crimen cometido por un alumno con una discapacidad a las autoridades adecuadas, o para prevenir el cumplimiento de la ley estatal y que las autoridades judiciales ejerzan sus responsabilidades en cuanto a la aplicación de la ley federal y estatal a crímenes cometidos por un alumno con discapacidad.

Remisión de registros

Una agencia que reporta el crimen cometido por un alumno con una discapacidad se asegurará de que se transmitan copias de los registros de educación especial y disciplinarios para su consideración por las autoridades correspondientes a quien la agencia reporta el crimen.

Alumnos inscritos en escuelas privadas

No se le solicitará pagar a una agencia pública por el costo de la educación (incluyendo educación especial y servicios relacionados) si:

1. El padre o la madre no informa al Equipo IEP antes de sacar a su hijo de la escuela pública propuesta para su ubicación por parte del Equipo IEP porque la rechazan.
2. El padre impide la evaluación del alumno; o
3. El sistema judicial determina que la acción "no es razonable".

El padre o la madre debe informar al Equipo IEP, por escrito, de sus preocupaciones e intentar matricular a su hijo en una escuela privada a costa del erario público. Este aviso lo debe recibir la agencia pública diez días hábiles antes de dar de baja al alumno y de inscribirlo en una escuela privada.

Traspaso de los derechos de paternidad en la mayoría de edad

Cuando un alumno con una discapacidad alcanza la mayoría de edad (18 años en Michigan si la corte no ha elegido un tutor legal), la agencia pública dará un aviso, tanto al alumno como al padre o la madre, de todos los derechos otorgados para la transferencia de los derechos del padre al alumno. Todos los derechos otorgados a los padres se transfieren a los alumnos que han alcanzado la mayoría de edad y están encarcelados en una institución correccional federal, local o estatal, juvenil o para adultos.

Padres sustitutos

Toda agencia pública asignará a una persona para ejercer como un sustituto del padre o la madre para proteger los derechos educativos de un alumno cuando:

1. No se puede identificar al padre ni a la madre;
2. La agencia pública, después de esfuerzos razonables, no pueda descubrir el paradero del padre o la madre;
3. El alumno es dependiente del estado bajo las leyes del mismo; o
4. El alumno es un menor y sin hogar ni compañía adulta.

El método para determinar si un alumno necesita un sustituto para el padre, y asignarlo, es responsabilidad de la agencia pública. La política para la asignación de padres sustitutos está disponible en la página web del MDE en www.michigan.gov/mde.

Las agencias públicas que asignan a un sustituto como padre o madre de un alumno se aseguran de que la persona:

1. No tenga intereses que entren en conflicto con los intereses del alumno que representan;
2. Tenga el conocimiento y las habilidades para representar de manera adecuada al alumno;
3. No sea empleado de la agencia pública que está involucrada en la educación y el cuidado del alumno;
4. Quien califique, por otra parte, para ser sustituto de padre o madre, no se considera empleado de la agencia pública sólo por recibir dinero de la agencia pública para servir como sustituto de padre o madre; y
5. Se asigne a no más de 30 días después de que haya una determinación por parte de la agencia de que el alumno necesita un sustituto.

El sustituto del padre o la madre puede representar al alumno en todas las cuestiones relacionadas con:

1. La identificación, evaluación y ubicación educativa del alumno; o

2. La provisión de la FAPE para el alumno.

Acceso a registros

Toda agencia pública deberá permitir al padre o la madre inspeccionar y revisar los registros relacionados con su hijo con respecto a la identificación, evaluación y la ubicación educativa del alumno, y la provisión de una FAPE al alumno, los cuales son recopilados, conservados y usados por la agencia pública conforme esta parte. La agencia pública cumplirá una solicitud sin demora innecesaria y antes de cualquier junta con respecto a otorgar un IEP o una audiencia relacionada con la identificación, evaluación o ubicación del alumno, y en ningún caso a más de 45 días después de que se hizo la solicitud. Al padre o la madre que solicita registros para usarlos en una junta del Equipo IEP, una audiencia o en una apelación, se le dará acceso a los registros inmediatamente.

El derecho de inspeccionar y de revisar los registros educativos conforme esta sección incluyen:

1. El derecho a una respuesta, de parte de la agencia pública que participa, a solicitudes razonables para las explicaciones e interpretaciones de los registros;
2. El derecho de que un representante del padre o la madre inspeccione y revise los registros; y
3. El derecho a solicitar que la agencia pública proporcione copias de los registros que contienen la información si la falta de entrega de esas copias efectivamente evitara que el padre o la madre pudiera ejercer el derecho a inspeccionar y revisar los registros.

Una agencia pública da por hecho que el padre o la madre tiene la autoridad de inspeccionar y revisar los registros relacionados con su hijo a menos que a la agencia pública se le haya dicho que el padre o la madre no tiene la autoridad conforme a ley estatal en vigor que trata de tales asuntos como la tutela, la separación y el divorcio.

Si algún registro educativo incluye información sobre más de un alumno, los padres de esos niños tendrán el derecho de inspeccionar y de revisar únicamente la información referente a su hijo o de ser informados de esa información en especial. Toda agencia pública deberá proporcionar a los padres, a solicitud, una lista del tipo y ubicación de los registros recopilados, conservados y usados por la agencia pública.

Registro de acceso

Toda agencia pública llevará un registro de las partes que obtienen acceso a los registros educativos recopilados o conservados, excepto el acceso del padre o la madre y de empleados autorizados de la agencia pública participante. Los registros de acceso incluirán el nombre de la parte, fecha de acceso y el fin por el cual la parte es autorizada a usar los archivos.

Cargos por buscar, recuperar y copiar registros

Una agencia pública participante no puede cobrar un cargo por buscar o recuperar información del archivo educativo del alumno. Una agencia pública puede cobrar un cargo por las copias de archivos que son hechas para el padre o la madre si efectivamente dicho cargo no evita que el padre ejerza su derecho a inspeccionar y revisar esos archivos.

Modificación de los registros a solicitud de los padres

El padre o la madre que considere que la información en los archivos educativos recopilados, conservados o usados es inexacta o engañosa, o que viola la privacidad u otros derechos de su hijo, puede solicitar a la agencia pública participante que guarda esta información que la modifique.

La agencia pública decidirá si modifica la información de acuerdo a la solicitud dentro de un periodo razonable de tiempo a partir de la recepción de la solicitud. Si la agencia pública se niega a modificar la información de acuerdo a la solicitud, deberá informar al padre o la madre sobre la negación y aconsejarlo sobre el derecho a una audiencia conforme a la sección 34 CFR §300.568 del reglamento federal que implementa la Ley IDEA.

La agencia pública deberá, a solicitud del interesado, brindar la oportunidad de una audiencia para cuestionar la información en los archivos educativos a fin de comprobar si es inexacta, engañosa o, por lo demás, una violación de la privacidad u otros derechos del alumno.

Si, como resultado de la audiencia, la agencia pública decide que la información es inexacta, engañosa o, por lo demás, una violación de la privacidad u otros derechos del alumno, deberá modificar la información como corresponde e informar al padre o la madre por escrito.

Si, como resultado de la audiencia, la agencia pública decide que la información no es inexacta, engañosa o, por lo demás, una violación de la privacidad u otros derechos del alumno, deberá informar al padre o la madre del derecho de colocar en los archivos educativos conservados sobre el alumno, una declaración comentando sobre la información o mencionado las razones para estar en desacuerdo con la decisión de la agencia pública. Cualquier información colocada en los archivos del alumno conforme esta sección debe ser conservada por la agencia pública como parte de los registros del alumno con tal de que el archivo o la parte impugnada sea conservada por la agencia pública. Si los archivos del alumno o la parte impugnada son mostradas por la agencia pública a cualquiera de las partes, la explicación también debe ser mostrada a la parte.

Confidencialidad

El consentimiento del padre debe ser obtenido antes de que la información personal identificable sea mostrada a alguien que no sean los funcionarios de las agencias que participan en la recopilación o el uso de esta información. No se necesita del consentimiento del padre o la madre si la información que se ha de usar cumple con los requisitos conforme la Ley IDEA. Una agencia educativa sujeta a la Ley de Derechos Educativos y de Privacidad de la Familia (FERPA) no puede dar información de los archivos educativos a las agencias participantes sin

el consentimiento del padre o la madre a menos que sea autorizado a hacerlo conforme a la Ley FERPA.

Dstrucción de información

La agencia pública le informará a los padres cuando la información personalmente identificable que sea recopilada, mantenida o utilizada bajo esta parte ya no sea necesaria para proveer servicios educativos al alumno.

La información debe ser destruida a petición de los padres. Sin embargo, el registro permanente del nombre, dirección, teléfono, calificaciones, registro de asistencia, clases concurredas, grados completados y años cursados puede mantenerse sin restricciones de tiempo.

Reclamaciones

“Reclamación” significa una alegación escrita y firmada que incluya los hechos en los cuales se basa la misma, de parte de un individuo o de una organización, de que hay una violación de cualquiera de las siguientes:

1. Cualquier disposición actual de las Reglas;
2. 1976 PA 451, MCL 380.1 et seq., según aplica a programas y servicios de educación especial;
3. La Ley IDEA de 1997, 20 U.S.C., Cap. 33, §1400 et seq., y los reglamentos que implementan la Ley, 34 CFR, Sección 300;
4. Un plan ISD para proveer programas y servicios de educación especial;
5. Un informe del Equipo de IEP, decisión de un funcionario de audiencias, o una decisión judicial en cuanto a programas y servicios de educación especial; o
6. La solicitud estatal de fondos federales bajo la Ley IDEA.

Si los padres sospechan de una violación, deben contactar al director de educación especial del ISD o el delegado del superintendente. Esta persona puede intentar resolver los conflictos informalmente, pero se le debe informar a los padres acerca de su derecho de presentar una reclamación formal. Se debe dar a los padres una copia de los **Reglamentos Administrativos para Educación Especial** (los Reglamentos) que tratan con las reclamaciones (Parte 8 de los Reglamentos) y una copia de los Procedimientos de Reclamaciones para Educación Especial. El reclamante puede solicitar ayuda para redactar una reclamación formal.

Si el padre presenta una reclamación formal, el ISD debe investigar la reclamación y dar al padre una copia de los hallazgos del proceso dentro de 21 días civiles. Si, luego de revisar el informe de la agencia pública, el padre no está de acuerdo con los hallazgos, puede apelar al MDE. Si el ISD no actúa de forma oportuna para investigar las inquietudes de los padres, los mismos pueden solicitar al MDE que investigue las inquietudes. Se someterá un informe escrito dentro de 60 días civiles desde el recibo de la queja por parte del ISD o el MDE, a no ser que se extienda el tiempo por

circunstancias excepcionales relacionadas a la reclamación. Una negación de un pedido de extensión es inapelable.

Regla de interpretación

Nada contenido bajo este título se interpretará para restringir ni limitar los derechos, procedimientos y recursos disponibles bajo la Constitución, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) del 1990, el Título 5 de la Ley de Rehabilitación del 1973 y otras leyes federales que protegen los derechos de alumnos incapacitados, excepto que, antes de iniciar una acción civil bajo tales leyes en pro de recursos judiciales que también estén disponibles bajo esta sección, los procedimientos de las secciones (f) y (g) deben cumplirse hasta el mismo punto que se requeriría si la acción hubiera sido iniciada bajo esta sección.

Anexo al IEP

El propósito del Anexo al IEP es **hacer cambios menores** al IEP en el año en el cual tiene efecto. Si se requieren cambios globales o sustanciales al IEP de un alumno, se debe hacer una reunión del Equipo de IEP para desarrollar un Informe de Equipo de IEP nuevo y completo.

El Anexo de IEP **no se puede usar** para los siguientes propósitos:

1. Para determinar o reevaluar cualquier elegibilidad a educación especial;
2. Para cambiar el **tipo de programa** del alumno, o
3. Para retirar al alumno del programa de educación especial.

Se debe informar a los padres del propósito, tiempo y lugar de la reunión y quién asistirá. Una invitación a una reunión de IEP debe decir claramente el propósito, indicando cuáles aspectos del IEP actual se están considerando para enmiendas. Se debe informar al padre o la madre que el IEP actual del alumno estará en efecto hasta la próxima fecha de revisión o reevaluación, el Anexo de IEP no puede implementarse si el padre o la madre rehúsa su consentimiento, y el padre tendrá derecho a una revisión completa del IEP al solicitarla.

Ya que el Anexo al IEP nunca es un IEP inicial que coloca a un alumno en educación especial, la firma de los padres no es necesaria en el Anexo de IEP para implementar el IEP. Sin embargo, el padre o la madre debe tener la oportunidad de firmar el Anexo de IEP para expresar que no está de acuerdo con el mismo antes de que sea implementado bajo las condiciones y fechas límite establecidas en la sección R 340.1722a.